

El rector ofrece a los 'exiliados' una reunión con la Ertzaintza

Goizelala cierra con Llera su ronda para que seis amenazados vuelvan a la UPV

LEYRE IGLESIAS / Bilbao

El rector de la Universidad del País Vasco, Iñaki Goizelala, ha ofrecido su mediación a los profesores *exiliados* por ETA para que se reúnan con el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, a la vista de las profundas dudas que albergan sobre el hecho de que su seguridad esté garantizada si regresan a sus plazas en septiembre, como les exige la UPV/EHU después del «cese definitivo» anunciado por la banda.

Son cuatro los docentes que no quieren volver a sus puestos; entre ellos, el catedrático de Ciencia Política Francisco Llera, la socióloga Gotzone Mora y el ex decano de Periodismo José Manuel Susperregui. A ellos Goizelala les ha invitado a mantener una reunión con Gabirondo, con el objetivo de que el responsable de la Ertzaintza les pueda aclarar personalmente en qué se basa la información policial que está utilizando el rector para exigir su retorno, y que no les ha sido entregada.

La Policía vasca, según esa información, no detecta «riesgo alguno que impida normalizar» su «situación laboral» en la Universidad que abandonaron a lo largo de la última década por la inaguantable presión de ETA y de su mundo. Este análisis no forma parte de un informe sobre los *exiliados* en particular, sino que corresponde a la evaluación periódica que los servicios de la Ertzaintza hacen de todos los amenazados, explican a este periódico fuentes oficiales del Departamento de Seguridad. En el caso de los profesores, data de «mediados de febrero».

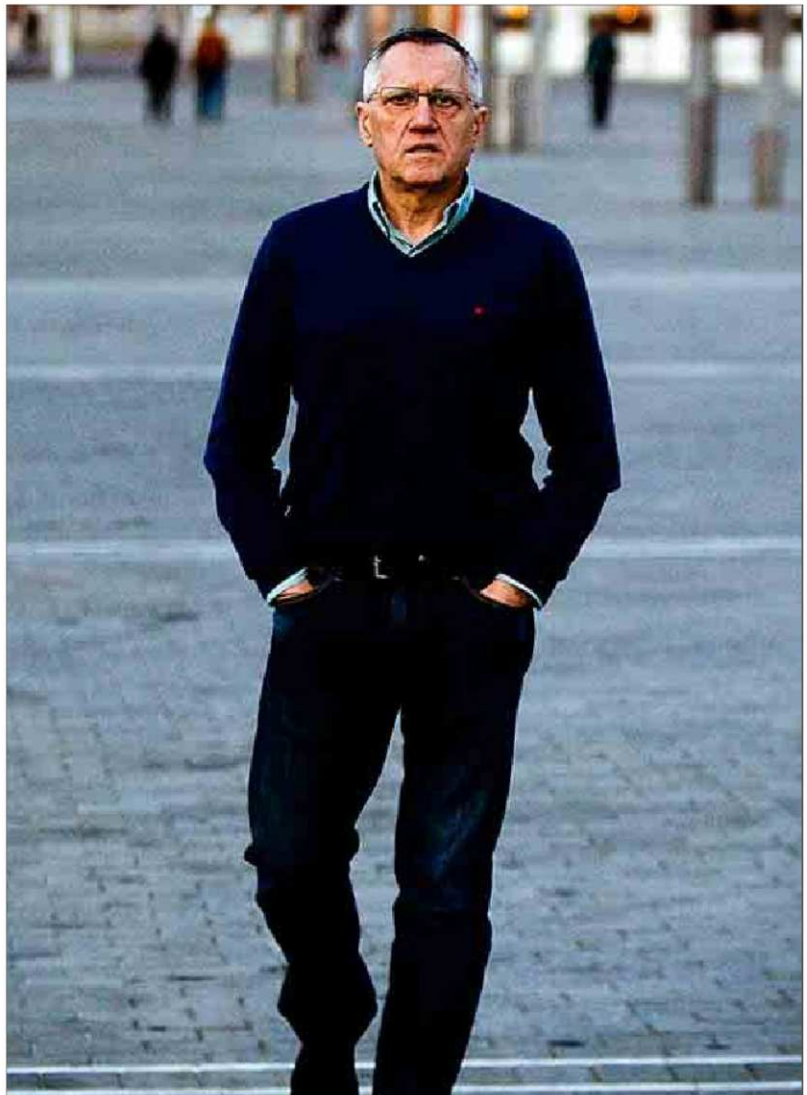
Los cuatro docentes reclamados por el rector cuestionan esa evaluación de riesgos —un quinto, el historiador Txema Portillo, prepara su regreso a la menos conflictiva Vitoria, y una sexta, la filósofa Sara Torres, ha renunciado a su plaza por medio de una carta enviada al rector—. Apuntan a las informaciones contradictorias que existen sobre la posibilidad de que ETA vuelva a atacar, procedentes de la Europol o de las fuerzas del orden dependientes del Ministerio del Interior, y señalan su temor no ya a recibir un tiro en la nuca, sino a sufrir violencia de baja intensidad —insultos, zarandeos o acoso laboral— en la complicada facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Leioa, adonde pertenecen los cuatro.

Está previsto que algunos de ellos

accedan a reunirse con el director de la Policía vasca y le pidan precisamente que encargue un informe personalizado sobre cada uno de sus casos. Por su parte, Francisco Llera, con quien el rector cerró ayer su ronda, rechaza esta nueva reunión.

A su juicio, la falta de seguridad es importante pero no la principal razón por la que se resiste a dar clases en su difícil departamento. El rector, según explica Llera —que actualmente trabaja en la universidad sevillana Pablo de Olavide aunque mantiene proyectos de investigación en Leioa como la dirección del Euskobarómetro—, le insistió en que se trata de un problema que el propio docente debe arreglar con su departamento. El politólogo salió ayer dolido de la «falta de sensibilidad» mostrada por Iñaki Goizelala, algo con lo que coincidieron la semana pasada Gotzone Mora y José Manuel Susperregui.

Más de un centenar de docentes apoya a los *exiliados* en contra del criterio de Goizelala: le recriminan que ellos no deben ser *normalizados* y que la UPV debe reconocer su sacrificio y no hacerles volver «por la puerta de atrás», porque esto alimentaría actitudes violentas. El equipo rectoral no hace comentarios: quiere «seguir respetando» la situación individual de los profesores.



El director del Euskobarómetro y catedrático de la UPV, Francisco Llera. / EL MUNDO

Covite pide ayuda a Hernando para aclarar los crímenes impunes

La Secretaría de Paz cierra su ronda de reuniones con víctimas

L. I. / Bilbao

La Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco cerró ayer con Covite su primera ronda de reuniones con una decena de asociaciones de víctimas del terrorismo autonómicas y de ámbito nacional. La directora de Víctimas y Derechos Humanos, Mónica Hernando, y el coordinador de Víctimas, Txema Urkijo, conversaron en Vitoria con la presidenta del colectivo que agrupa a más víctimas en Euskadi, Consuelo Ordóñez, y con los miembros de su renovada junta directiva Ana Velasco —hija del comandante Jesús Velasco, tiroteado por ETA en Vitoria en 1980— y Antonio Recio, hijo del agente del CESID del mis-

mo nombre asesinado en la misma ciudad, un año antes—.

La reunión sirvió para que Hernando se presentara como nueva interlocutora institucional con las víctimas del terrorismo —también de abusos policiales, víctimas del franquismo, etc.— y para que Covite le expusiera sus peticiones. La prioritaria: que, al igual que el Gobierno se implica en que el Ejecutivo central flexibilice la política penitenciaria o promueva la *vía Nanclares* para la reinserción de los etarras arrepentidos, también presione para que estos presos colaboren con la Justicia en el esclarecimiento de los 326 crímenes de ETA que la Justicia no ha resuelto.

Los portavoces de Covite insistie-

ron en que el derecho a la verdad y a la justicia es «lo realmente importante» para las víctimas, más allá del arrepentimiento de los terroristas. Por eso, opinaron que a estos debería pedírseles información sobre los atentados en los que pudieron participar o de los que podrían saber datos. Este sentido de la «colaboración» con las autoridades es una de las posibilidades que recoge la legislación para lograr beneficios penitenciarios; pero no es requisito obligatorio.

Los interlocutores del área que dirige Jonan Fernández se mostraron de acuerdo en ese objetivo de buscar la verdad y la justicia —están obligados por la legislación internacional, nacional y vasca—, aunque no

coinciden con Covite en que esa exigencia deba tener efectos en el diseño de la política penitenciaria. En la charla estuvieron presentes los nombres de Kepa Pikabea y de Valentín Lasarte, asesino del hermano de la presidenta de Covite, el popular Gregorio Ordóñez, que desde ayer disfruta de su primer permiso de tres días.

La reunión también dio para abordar el puñado de encuentros entre víctimas y verdugos que se han producido en los últimos años. Ordóñez no censuró estas citas, según fuentes de la asociación, pero sí subrayó el peligro que existe de que las víctimas que no quieren participar en ellas sean señaladas como vengativas.

Covite se reunió después con el parlamentario del PP Carmelo Barrio, a quien le expresaron su preocupación por la «flexibilización» de la política penitenciaria que están observando, así como por las declaraciones posibilistas de algunos *populares* sobre su acercamiento hacia la izquierda abertzale.